

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 084.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2020-00016-00
EJECUTANTE:	SANDRA LORENA MURILLO VÉLEZ
EJECUTADO:	MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE

1. ASUNTO

Procede el despacho a decidir sobre la aprobación de la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo iniciado a través de apoderado judicial por la señora **SANDRA LORENA MURILLO VÉLEZ**, en contra del **MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE**.

2. CONSIDERACIONES

Mediante auto interlocutorio No. 1266 del 14 de diciembre de 2020, se dispuso seguir adelante la ejecución a favor de la señora Sandra Lorena Murillo Vélez y en contra del municipio de Palmira - Valle, tal y como se dispuso en el auto interlocutorio No. 210 del 11 de febrero de 2020, a través del cual se libró mandamiento de pago, por las siguientes sumas de dinero:

“LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra del MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE, y a favor de la señora SANDRA LORENA MURILLO VÉLEZ, por las siguientes sumas de dinero:

- 1. Por la suma de \$ 2.515.363, por concepto de prima de servicios.*
- 2. Por la suma de \$ 308.352, por concepto de la condena en costas efectuada dentro del proceso ordinario.*
- 3. Por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero antes referidas, a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia y hasta el día que se realice el pago efectivo de la obligación, los cuales se tasaran de acuerdo a lo ordenado en la sentencia.”*

Estos montos corresponden a la condena impuesta a cargo de la entidad ejecutada en la sentencia fechada el 28 de marzo de 2015, por medio de la cual este Estrado Judicial, ordenó al municipio de Palmira reconocer y pagar a favor de la señora Sandra Lorena Murillo Vélez, la prima de servicios de que trata el Decreto 1042 de 1978, decisión confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la Sentencia fechada el 28 de enero de 2016. En los que corresponde a las costas, las mismas fueron aprobadas mediante auto de sustanciación del 12 de octubre de 2016, por la suma total de \$ 308.352, decisión que quedó en firme y sin recurso alguno.

Ahora bien, en el numeral 2º de la providencia por medio de la cual se ordenó seguir adelante la ejecución, se ordenó practicar la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso. Para tal efecto, se concedió a las partes intervinientes el término de diez (10) días, para presentar la liquidación del crédito respectiva.

En cumplimiento de lo anterior, el apoderado judicial de la parte ejecutante presentó liquidación del crédito mediante mensaje de datos allegado a los canales digitales del Juzgado, por la suma total de cinco millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte. (\$ 5.388.341), liquidación de la cual se corrió traslado a la parte ejecutada, por el término de tres (3) días, sin que se haya pronunciado al respecto.

En este contexto, el Despacho procederá a decidir si aprueba o modifica la liquidación realizada por la parte ejecutante, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3º, del artículo 446 del C.G.P., norma que dispone:

“ARTÍCULO 446. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS. *Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las siguientes reglas:*

- 1. Ejecutoriado el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los documentos que la sustenten, si fueren necesarios.*
- 2. De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte en la forma prevista en el artículo 110, por el término de tres (3) días, dentro del cual sólo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada.*
- 3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación. (...)”*

De acuerdo con lo expuesto en precedencia y revisado el escrito de liquidación del crédito presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutante, así como el auto interlocutorio No. 1266 del 14 de diciembre de 2020, a través del cual se dispuso seguir adelante la ejecución a favor de la parte ejecutante, el Despacho procederá a realizar la liquidación del crédito, en los siguientes términos:

2.1. Liquidación del crédito:

2.1.1. Capital:

Teniendo en cuenta lo ordenado en la sentencia que conforma el titulo base de ejecución, se tiene que la entidad ejecutada adeuda a favor de la parte ejecutante por **concepto de capital** la suma de dos millones quinientos quince mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. (**\$ 2.515.363**), correspondientes al factor de prima de servicios.

2.1.2. Intereses moratorios:

LIQUIDACIÓN DE INTERESES: Se liquidarán intereses de conformidad con el título base de recaudo, esto es, el articulo 192 y 195 del CPACA, bajo los siguientes términos:

INTERESES DTF: 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, desde el 30 de marzo de 2016 hasta el 29 de enero de 2017.

INTERESES MORATORIOS: desde el anterior termino, el 30 de enero de 2017 hasta el 15 de febrero de 2022.

BANCO DE LA REPUBLICA /SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA			LIQUIDACION INTERESES DE MORA CAPITAL \$ 2.515.363					
RES. NRO.	DESDE	HASTA	DIAS	DTF /TASA INT. CTE.	TASA USURA CERTIFIC	TASA EFECTIVA DIARIA	CAPITAL BASE DE LIQUIDACION	VALOR INTERESES DE MORA MENSUAL
DTF	01-mar.-16	31-mar.-16	2	6,35%	N/A	0,01687%	\$ 2.515.363	\$ 849
	01-abr.-16	30-abr.-16	30	6,65%	N/A	0,01764%	\$ 2.515.363	\$ 13.312
	01-may.-16	31-may.-16	31	6,83%	N/A	0,01810%	\$ 2.515.363	\$ 14.116
	01-jun.-16	30-jun.-16	30	6,91%	N/A	0,01831%	\$ 2.515.363	\$ 13.815
	01-jul.-16	31-jul.-16	31	7,26%	N/A	0,01920%	\$ 2.515.363	\$ 14.974
	01-ago.-16	31-ago.-16	31	7,19%	N/A	0,01902%	\$ 2.515.363	\$ 14.835
	01-sep.-16	30-sep.-16	30	7,18%	N/A	0,01900%	\$ 2.515.363	\$ 14.337
	01-oct.-16	31-oct.-16	31	7,09%	N/A	0,01877%	\$ 2.515.363	\$ 14.635
	01-nov.-16	30-nov.-16	30	7,01%	N/A	0,01856%	\$ 2.515.363	\$ 14.009
	01-dic.-16	31-dic.-16	31	6,92%	N/A	0,01833%	\$ 2.515.363	\$ 14.296
	01-ene.-17	31-ene.-17	29	6,94%	N/A	0,01838%	\$ 2.515.363	\$ 13.411
1612	01-ene.-17	31-ene.-17	2	22,34%	33,51%	0,07921%	\$ 2.515.363	\$ 3.985
1612	01-feb.-17	28-feb.-17	28	22,34%	33,51%	0,07921%	\$ 2.515.363	\$ 55.789
1612	01-mar.-17	31-mar.-17	31	22,34%	33,51%	0,07921%	\$ 2.515.363	\$ 61.766
488	01-abr.-17	30-abr.-17	30	22,33%	33,50%	0,07918%	\$ 2.515.363	\$ 59.750
488	01-may.-17	31-may.-17	31	22,33%	33,50%	0,07918%	\$ 2.515.363	\$ 61.742
488	01-jun.-17	30-jun.-17	30	22,33%	33,50%	0,07918%	\$ 2.515.363	\$ 59.750
907	01-jul.-17	31-jul.-17	31	21,98%	32,97%	0,07810%	\$ 2.515.363	\$ 60.899
907	01-ago.-17	31-ago.-17	31	21,98%	32,97%	0,07810%	\$ 2.515.363	\$ 60.899
1155	01-sep.-17	30-sep.-17	30	21,48%	32,22%	0,07655%	\$ 2.515.363	\$ 57.765
1298	01-oct.-17	31-oct.-17	31	21,15%	31,73%	0,07552%	\$ 2.515.363	\$ 58.888
1447	01-nov.-17	30-nov.-17	30	20,96%	31,44%	0,07493%	\$ 2.515.363	\$ 56.540
1619	01-dic.-17	31-dic.-17	31	20,77%	31,16%	0,07433%	\$ 2.515.363	\$ 57.961
1890	01-ene.-18	31-ene.-18	31	20,69%	31,04%	0,07408%	\$ 2.515.363	\$ 57.765
131	01-feb.-18	28-feb.-18	28	21,01%	31,52%	0,07508%	\$ 2.515.363	\$ 52.881
259	01-mar.-18	31-mar.-18	31	20,68%	31,02%	0,07405%	\$ 2.515.363	\$ 57.741
398	01-abr.-18	30-abr.-18	30	20,48%	30,72%	0,07342%	\$ 2.515.363	\$ 55.404

527	01-may.-18	31-may.-18	31	20,44%	30,66%	0,07329%	\$ 2.515.363	\$ 57.153
687	01-jun.-18	30-jun.-18	30	20,28%	30,42%	0,07279%	\$ 2.515.363	\$ 54.929
820	01-jul.-18	31-jul.-18	31	20,03%	30,05%	0,07200%	\$ 2.515.363	\$ 56.144
954	01-ago.-18	31-ago.-18	31	19,94%	29,91%	0,07172%	\$ 2.515.363	\$ 55.922
1112	01-sep.-18	30-sep.-18	30	19,81%	29,72%	0,07130%	\$ 2.515.363	\$ 53.807
1294	01-oct.-18	31-oct.-18	31	19,63%	29,45%	0,07073%	\$ 2.515.363	\$ 55.155
1521	01-nov.-18	30-nov.-18	30	19,49%	29,24%	0,07029%	\$ 2.515.363	\$ 53.040
1708	01-dic.-18	31-dic.-18	31	19,40%	29,10%	0,07000%	\$ 2.515.363	\$ 54.585
1872	01-ene.-19	31-ene.-19	31	19,16%	28,74%	0,06924%	\$ 2.515.363	\$ 53.988
111	01-feb.-19	28-feb.-19	28	19,70%	29,55%	0,07096%	\$ 2.515.363	\$ 49.974
263	01-mar.-19	31-mar.-19	31	19,37%	29,06%	0,06991%	\$ 2.515.363	\$ 54.510
389	01-abr.-19	30-abr.-19	30	19,32%	28,98%	0,06975%	\$ 2.515.363	\$ 52.632
574	01-may.-19	31-may.-19	31	19,34%	29,01%	0,06981%	\$ 2.515.363	\$ 54.436
697	01-jun.-19	30-jun.-19	30	19,30%	28,95%	0,06968%	\$ 2.515.363	\$ 52.583
829	01-jul.-19	31-jul.-19	31	19,28%	28,92%	0,06962%	\$ 2.515.363	\$ 54.286
1018	01-ago.-19	31-ago.-19	31	19,32%	28,98%	0,06975%	\$ 2.515.363	\$ 54.386
1145	01-sep.-19	30-sep.-19	30	19,32%	28,98%	0,06975%	\$ 2.515.363	\$ 52.632
1293	01-oct.-19	31-oct.-19	31	19,10%	28,65%	0,06904%	\$ 2.515.363	\$ 53.838
1474	01-nov.-19	30-nov.-19	30	19,03%	28,55%	0,06882%	\$ 2.515.363	\$ 51.933
1603	01-dic.-19	31-dic.-19	31	18,91%	28,37%	0,06844%	\$ 2.515.363	\$ 53.364
1768	01-ene.-20	31-ene.-20	31	18,77%	28,16%	0,06799%	\$ 2.515.363	\$ 53.014
94	01-feb.-20	28-feb.-20	28	19,06%	28,59%	0,06892%	\$ 2.515.363	\$ 48.538
205	01-mar.-20	31-mar.-20	31	18,95%	28,43%	0,06856%	\$ 2.515.363	\$ 53.464
351	01-abr.-20	30-abr.-20	30	18,69%	28,04%	0,06773%	\$ 2.515.363	\$ 51.110
437	01-may.-20	31-may.-20	31	18,19%	27,29%	0,06612%	\$ 2.515.363	\$ 51.558
505	01-jun.-20	30-jun.-20	30	18,12%	27,18%	0,06589%	\$ 2.515.363	\$ 49.724
605	01-jul.-20	31-jul.-20	31	18,12%	27,18%	0,06589%	\$ 2.515.363	\$ 51.382
685	01-ago.-20	31-ago.-20	31	18,29%	27,44%	0,06644%	\$ 2.515.363	\$ 51.810
2555	01-sep.-20	30-sep.-20	30	18,35%	27,53%	0,06664%	\$ 2.515.363	\$ 50.284
869	01-oct.-20	31-oct.-20	31	18,09%	27,14%	0,06580%	\$ 2.515.363	\$ 51.306
947	01-nov.-20	30-nov.-20	30	17,84%	26,76%	0,06499%	\$ 2.515.363	\$ 49.040
1034	01-dic.-20	31-dic.-20	31	17,46%	26,19%	0,06375%	\$ 2.515.363	\$ 49.711
1215	01-ene.-21	31-ene.-21	31	17,32%	25,98%	0,06329%	\$ 2.515.363	\$ 49.355
64	01-feb.-21	28-feb.-21	28	17,54%	26,31%	0,06401%	\$ 2.515.363	\$ 45.084
161	01-mar.-21	31-mar.-21	31	17,41%	26,12%	0,06359%	\$ 2.515.363	\$ 49.584
305	01-abr.-21	30-abr.-21	30	17,31%	25,97%	0,06326%	\$ 2.515.363	\$ 47.738
407	01-may.-21	31-may.-21	31	17,22%	25,83%	0,06297%	\$ 2.515.363	\$ 49.100
509	01-jun.-21	30-jun.-21	30	17,21%	25,82%	0,06294%	\$ 2.515.363	\$ 47.492
622	01-jul.-21	31-jul.-21	31	17,18%	25,77%	0,06284%	\$ 2.515.363	\$ 48.998
804	01-ago.-21	31-ago.-21	31	17,24%	25,86%	0,06303%	\$ 2.515.363	\$ 49.151
931	01-sep.-21	30-sep.-21	30	17,19%	25,79%	0,06287%	\$ 2.515.363	\$ 47.442
1095	01-oct.-21	31-oct.-21	31	17,08%	25,62%	0,06251%	\$ 2.515.363	\$ 48.743
1259	01-nov.-21	30-nov.-21	30	17,27%	25,91%	0,06313%	\$ 2.515.363	\$ 47.640
1405	01-dic.-21	31-dic.-21	31	17,46%	26,19%	0,06375%	\$ 2.515.363	\$ 49.711
1597	01-ene.-22	31-ene.-22	31	17,66%	26,49%	0,06440%	\$ 2.515.363	\$ 50.219
143	01-feb.-22	28-feb.-22	15	18,30%	27,45%	0,06648%	\$ 2.515.363	\$ 25.081
TOTAL CAPITAL E INTERESES AL 15 DE FEBRERO DE 2022							\$ 2.515.363	\$ 3.367.688

Teniendo en cuenta lo anterior, se logra determinar que la entidad ejecutada, municipio de Palmira - Valle, al 15 de febrero de 2022, adeuda a favor de la señora **Sandra Lorena Murillo Vélez**, la suma total de seis millones ciento noventa y un mil cuatrocientos tres pesos m/cte. (\$ 6.191.403), por los siguientes conceptos:

CAPITAL AL 30 DE MARZO DE 2016	\$2.515.363
INTERESES CAUSADOS DESDE EL 30/03/2016-15/02/2022	\$3.367.688
COSTAS ORDINARIO	\$308.352
TOTAL, CAPITAL E INTERESES AL 15 DE FEBRERO DE 2022	\$6.191.403

Así las cosas, se procederá a modificar de oficio la liquidación presentada por el apoderado judicial de la parte ejecutante, como quiera que los intereses de mora no fueron liquidados en debida forma y se tendrá como liquidación del crédito la realizada por el Despacho, por las sumas de dinero antes indicadas.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: TENER como liquidación del crédito la realizada por el despacho, por la suma de total de **SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE. (\$ 6.191.403)**, por concepto de capital e intereses de mora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CAPITAL AL 30 DE MARZO DE 2016	\$2.515.363
INTERESES CAUSADOS DESDE EL 30/03/2016-15/02/2022	\$3.367.688
COSTAS ORDINARIO	\$308.352
TOTAL, CAPITAL E INTERESES AL 15 DE FEBRERO DE 2022	\$6.191.403

TERCERO: EJECUTORIADO el presente auto, por secretaría procédase a la liquidación de costas del proceso.

CUARTO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoactivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 085.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2020-00009-00
DEMANDANTE:	MARIA TERESA PINO PATIÑO
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE PALMIRA

1. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la medida cautelar de embargo solicitada por el apoderado judicial de la parte ejecutante

2. ANTECEDENTES

La parte ejecutante solicita decretar la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que el municipio de Palmira - Valle, posea a cualquier título en las siguientes entidades bancarias: *“Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha”*.

Con el fin de resolver sobre la medida cautelar solicitada, debe indicarse que el artículo 63 de la Constitución Política, prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley.

A su turno, el artículo 357 de la Constitución Política, determina que los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación y que la ley determinará el porcentaje mínimo de esa participación definiendo las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos.

En desarrollo del artículo anterior, se expidió la Ley 715 de 2001, la cual estableció en su artículo 91, la prohibición de la unidad de caja de los recursos del sistema general de participaciones con los demás recursos del presupuesto de las entidades territoriales y, en este sentido, determinó que estos recursos no pueden ser objeto de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. Igualmente, en el artículo 18 ibidem, se dispuso que los recursos del sector educativo no pueden ser objeto de embargo.¹

¹ En los términos de la Sentencia T-873 de 2012, se puede determinar que los recursos del sistema general de participaciones son inembargables. De dicha providencia, se resalta: *“...El Sistema General de Participaciones está integrado por los recursos que en virtud de los artículos*

El artículo 19 del Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, reiteró que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Este artículo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-365 de 1997 y al respecto se estimó que: *“los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”*

Por otra parte, el Decreto 1101 de 2007, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 1° y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones, determinó: *“...Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En los términos establecidos en la Ley 715 de 2001, los recursos del Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores.”*

De otro lado, se tiene que el artículo 594 del Código General del Proceso, dispone que no se pueden embargar los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social, así:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta

356 y 357 de la C.P., son transferidos de la Nación a las entidades territoriales, de modo que se puedan financiar los servicios cuya competencia les asigna la ley 715 de 2001. El artículo 3° de la Ley 715 de 2001 –modificado por el artículo 1° de la Ley 1176 de 2007– señala que el Sistema General de Participaciones está constituido por: i) Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denomina participación para educación; ii) Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denomina participación para salud y iii) Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denomina participación para propósito general”.

la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

(...)

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.”

En los términos antes referidos, es claro que el artículo 594 del C.G.P., estatuye la prohibición general de decretar embargos sobre bienes de naturaleza inembargable y, puntualmente en el caso de los municipios, el referido artículo debe armonizarse con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Esta norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. *La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.*

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

PARÁGRAFO. *De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y presupuestales que se requieran para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.”*

De manera que, tampoco resulta procedente el embargo sobre los recursos del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías, de las rentas propias con destinación específica para el gasto social de los municipios y de las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios que hagan los particulares a favor de los municipios.

Esta norma especial, dispuso sobre la improcedibilidad de decretar medidas cautelares de embargo en donde sea parte demandada un municipio, antes de que haya quedado ejecutoriada la sentencia o la providencia correspondiente que ordene seguir adelante con la ejecución.

Según lo expuesto se puede establecer que, frente a las medidas cautelares solicitadas en contra de las entidades territoriales, **son inembargables** los siguientes bienes:

Tipo de bien	Fundamento Legal
Bienes, rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Cuentas del sistema general de participaciones	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Cuentas del sistema general de regalías	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos de la seguridad social	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos del sistema general de participaciones	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Recursos del sistema general de regalías	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

A partir de lo anterior, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los bienes o recursos antes referidos, trae una excepción en el párrafo del artículo 594 del C.G.P.C., en razón a que otorgó la facultad al funcionario que ordena la medida cautelar, de ordenar embargos sobre los bienes enlistados en artículo 594 ibidem, siempre que se cumpla con la carga argumentativa de invocar y explicar de manera clara y precisa el fundamento legal para la procedencia de la medida. En efecto, preciso:

“Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.”

En este contexto, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los recursos que hacen parte del sistema general de participaciones, fue condicionado en sentencia C-1154 de 2008, en el sentido de permitir de manera excepcional el decreto de medidas cautelares para el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia.

En dicha providencia, el Alto Tribunal expuso en síntesis lo siguiente:

*“...El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el **Presupuesto General de la Nación**. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.*

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u **obligaciones de origen laboral** con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

(...)

4.3.2.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que **los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados** mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, **con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones,** cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.

(...)

4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación. “

Revisados los preceptos legales y los pronunciamientos dados por la Corte Constitucional² se logra determinar que la regla general es la inembargabilidad de los recursos públicos, toda vez que con ello se asegura la consecución de los fines esenciales del Estado y se garantiza la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el principio de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como **absoluto**, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla general, las cuales pasaran a exponerse en los términos del pronunciamiento dado por el Consejo de Estado en providencia fechada 08 de mayo de 2014³, en donde sintetizó:

“...No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe entenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

*Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del **presupuesto de las entidades** y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de⁴:*

i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas⁵;

ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones⁶; y

iii) títulos que provengan del Estado⁷ que reconozcan una obligación clara, expresa y actualmente exigible⁸. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.

² Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.

³ Consejo de Estado, Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicación número: 11001-03-27-000-2012-00044-00(19717), actor: Marlon Andrés Muñoz Guzmán, demandado: Superintendencia Financiera de Colombia.

⁴ Cfr. sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

⁵ Cfr. sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

⁶ Cfr. sentencia C-354 de 1997 C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.

⁷ Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.

⁸ Sentencia C-354 de 1997.

Tratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Corte Constitucional ha dicho que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008⁹, teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, se ajusta a la Constitución, en la medida en que se consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP a la vez que autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las entidades territoriales, de modo que garantiza la destinación social constitucional del SGP sin desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral¹⁰” (Negrilla y Subrayado del Despacho)

Finalmente, el Alto Tribunal concluyó:

“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.

Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral.”

Con relación a la vigencia de las excepciones a la regla general de inembargabilidad antes expuestas, el Consejo de Estado en sede de tutela, a través de la sentencia fechada el **25 de marzo de 2021**¹¹, reiteró los siguientes argumentos:

“...Siendo ello así ha precisado que, el legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación, pero que, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, por cuanto el postulado de la prevalencia del interés general comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

⁹ Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes.

¹⁰ Sentencia C-1154 de 2008.

¹¹ C.E., Sección Quinta, Exp. 20001-23-33-000-2020-00484-01(AC), mar. 25/21. C.P. Rocío Araujo Oñate.

La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; la segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, excepción que fue consagrada desde la sentencia C-354 de 1997, en la que la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación) (...)

*Las circunstancias excepcionales referidas **mantienen plena vigencia** con respecto la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación aun con la existencia en el ordenamiento del artículo 594 del Código General del Proceso, el cual debe interpretarse con los parámetros establecidos por la Corte, pues únicamente así es dable garantizar los principios y valores contenidos en la Carta, exigiéndose sí que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, lo cual ocurrió en el caso concreto y, adicionalmente, el proceso ejecutivo ha sido ineficaz para lograr el pago efectivo de la obligación, causándose intereses moratorios.*

(....)

De la ratio de las sentencias de constitucionalidad que han precisado las excepciones a la regla general de inembargabilidad, resulta forzoso concluir que el artículo 594 del Código General del Proceso debe interpretarse teniéndolas en cuenta, esto es, incluyéndolas a la hora de darle alcance en el caso concreto, a efectos de hacer efectivos derechos y principios de raigambre fundamental, respecto de los cuales la aplicación de la prohibición de embargar recursos del Presupuesto General de la Nación, los tornaría nugatorios.”

Así las cosas, debe concluirse que, si bien el Código General del Proceso en su artículo 594 ha reiterado la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, de la Seguridad Social y las cuentas del Sistema General de Participación, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha considerado que dicha prohibición no es absoluta y debe ser valorada atendiendo las particularidades de cada caso. Es por ello que, en razón a que en el presente asunto se pretende el pago de una acreencia contenida en una decisión judicial, en la que inclusive se reconoció un derecho de índole laboral y a la fecha de esta providencia la entidad territorial ejecutada no ha atendido los plazos que la ley dispone para su cancelación, resulta procedente la medida solicitada

Además, en el asunto que nos ocupa la providencia que ordena seguir adelante la ejecución, se encuentra en firme y sin recurso alguno, por lo que también resulta viable acceder a decretar la medida cautelar de embargo, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Expuesto lo anterior, se procederá a decretar la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante y, en este sentido, se ordenará librar por secretaria los oficios a las respectivas entidades bancarias en donde el **municipio de Palmira - Valle**, tenga cuentas de ahorros y corrientes, advirtiéndolo para ello, que en el caso concreto se configuran las excepciones que ha trazado la jurisprudencia, para proceder al embargo de las cuentas que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y que tienen el carácter de inembargables, toda vez que se trata de una obligación contenida en una sentencia judicial de origen laboral.

En cuanto a la limitación del embargo, el artículo 599 del Código General del Proceso, facultó al Juez para limitar el embargo y secuestro a lo necesario, señalando para ello, que el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud objeto de estudio se enmarca en el caso regulado por el numeral 10 del artículo 593 del Código General del Proceso¹², el Despacho limitará el valor del embargo y secuestro de las cuentas de ahorros y/o corrientes que se encuentren a nombre del **municipio de Palmira - Valle**, a la suma de once millones veintiséis mil ciento cincuenta y un pesos m/cte. (\$11.026.151), lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 606 del 13 de diciembre de 2021, incrementado en un diez por ciento (10%).

Esto atendiendo que, mediante el auto del 13 de diciembre de 2021, previamente referido, se dispuso tener como liquidación del crédito la realizada por el Despacho pro la suma total de diez millones veintitrés mil setecientos setenta y cuatro pesos m/cte. (\$10.023.774), por concepto de capital e intereses de mora.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO y retención de los dineros que tenga el **MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE**, identificado con Nit. 891.380.007-3, en las siguientes entidades bancarias “*Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha*”.

SEGUNDO: El embargo referido en el numeral anterior se limitará a la suma de la suma de **ONCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$11.026.151)**, lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 606 del 13 de diciembre de 2021, incrementado en un diez por ciento (10%), en atención a lo señalado en el artículo 599 del Código General del Proceso.

TERCERO: Para la efectividad de la medida, en los términos del artículo 593 del Código General del Proceso, se **ORDENA OFICIAR** a las entidades bancarias

¹² **ART. 593. EMBARGOS.** Para efectuar embargos se procederá así: 1. (...)... 10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

destinatarias de la misma, para que consignen la suma retenida a órdenes de este Juzgado en la **cuenta de depósitos judiciales No. 760012045001 del Banco Agrario de Colombia**, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación.

Advertir igualmente que se trata de un proceso ejecutivo cuyo título de ejecución es una sentencia judicial en la que se reconocieron prestaciones de índole laboral, remitiendo copia a cada una de ellas del presente auto y de la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 086.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2019-00220-00
DEMANDANTE:	BEATRIZ EUGENIA VELASCO PERAFAN
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

1. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la medida cautelar de embargo solicitada por el apoderado judicial de la parte ejecutante

2. ANTECEDENTES

La parte ejecutante solicita decretar la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que el Distrito Especial de Santiago de Cali, posea a cualquier título en las siguientes entidades bancarias: *“Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha”*.

Con el fin de resolver sobre la medida cautelar solicitada, debe indicarse que el artículo 63 de la Constitución Política, prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley.

A su turno, el artículo 357 de la Constitución Política, determina que los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación y que la ley determinará el porcentaje mínimo de esa participación definiendo las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos.

En desarrollo del artículo anterior, se expidió la Ley 715 de 2001, la cual estableció en su artículo 91, la prohibición de la unidad de caja de los recursos del sistema general de participaciones con los demás recursos del presupuesto de las entidades territoriales y, en este sentido, determinó que estos recursos no pueden ser objeto de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. Igualmente, en el

artículo 18 ibidem, se dispuso que los recursos del sector educativo no pueden ser objeto de embargo.¹

El artículo 19 del Decreto 111 de 1996, por medio del cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, reiteró que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Este artículo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-365 de 1997 y al respecto se estimó que: *“los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.”*

Por otra parte, el Decreto 1101 de 2007, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 1° y 91 de la Ley 715 de 2001, y se dictan otras disposiciones, determinó: *“...Los recursos del Sistema General de Participaciones, por su destinación social constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En los términos establecidos en la Ley 715 de 2001, los recursos del Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad y por sectores.”*

De otro lado, se tiene que el artículo 594 del Código General del Proceso, dispone que no se pueden embargar los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social, así:

“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

¹ En los términos de la Sentencia T-873 de 2012, se puede determinar que los recursos del sistema general de participaciones son inembargables. De dicha providencia, se resalta: *“...El Sistema General de Participaciones está integrado por los recursos que en virtud de los artículos 356 y 357 de la C.P., son transferidos de la Nación a las entidades territoriales, de modo que se puedan financiar los servicios cuya competencia les asigna la ley 715 de 2001. El artículo 3° de la Ley 715 de 2001 –modificado por el artículo 1° de la Ley 1176 de 2007– señala que el Sistema General de Participaciones está constituido por: i) Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se denomina participación para educación; ii) Una participación con destinación específica para el sector salud, que se denomina participación para salud y iii) Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, que se denomina participación para propósito general”.*

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

(...)

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.”

En los términos antes referidos, es claro que el artículo 594 del C.G.P., estatuye la prohibición general de decretar embargos sobre bienes de naturaleza inembargable y, puntualmente en el caso de los municipios, el referido artículo debe armonizarse con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Esta norma dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 45. NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra.

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.

PARÁGRAFO. De todas formas, corresponde a los alcaldes asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, para lo cual deberán adoptar las medidas fiscales y presupuestales que se requieran

para garantizar los derechos de los acreedores y cumplir con el principio de finanzas sanas.”

De manera que, tampoco resulta procedente el embargo sobre los recursos del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías, de las rentas propias con destinación específica para el gasto social de los municipios y de las sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios que hagan los particulares a favor de los municipios.

Esta norma especial, dispuso sobre la improcedibilidad de decretar medidas cautelares de embargo en donde sea parte demandada un municipio, antes de que haya quedado ejecutoriada la sentencia o la providencia correspondiente que ordene seguir adelante con la ejecución.

Según lo expuesto se puede establecer que, frente a las medidas cautelares solicitadas en contra de las entidades territoriales, **son inembargables** los siguientes bienes:

Tipo de bien	Fundamento Legal
Bienes, rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Cuentas del sistema general de participaciones	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Cuentas del sistema general de regalías	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos de la seguridad social	Numeral 1 del artículo 591 del C.G.P.
Recursos del sistema general de participaciones	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Recursos del sistema general de regalías	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.
Sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.	Artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

A partir de lo anterior, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los bienes o recursos antes referidos, trae una excepción en el parágrafo del artículo 594 del C.G.P.C., en razón a que otorgó la facultad al funcionario que ordena la medida cautelar, de ordenar embargos sobre los bienes enlistados en artículo 594 ibidem, siempre que se cumpla con la carga

argumentativa de invocar y explicar de manera clara y precisa el fundamento legal para la procedencia de la medida. En efecto, preciso:

“Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.”

En este contexto, es menester señalar que el principio absoluto de inembargabilidad de los recursos que hacen parte del sistema general de participaciones, fue condicionado en sentencia C-1154 de 2008, en el sentido de permitir de manera excepcional el decreto de medidas cautelares para el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia.

En dicha providencia, el Alto Tribunal expuso en síntesis lo siguiente:

*“...El Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el **Presupuesto General de la Nación**. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.*

*4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u **obligaciones de origen laboral** con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.*

(...)

*4.3.2.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que **los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados** mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, **con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al***

pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.

(...)

4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación. “

Revisados los preceptos legales y los pronunciamientos dados por la Corte Constitucional² se logra determinar que la regla general es la inembargabilidad de los recursos públicos, toda vez que con ello se asegura la consecución de los fines esenciales del Estado y se garantiza la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el principio de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como **absoluto**, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla general, las cuales pasaran a exponerse en los términos del pronunciamiento dado por el Consejo de Estado en providencia fechada 08 de mayo de 2014³, en donde sintetizó:

“...No obstante, este principio no puede ser considerado absoluto, pues la aplicación del mismo debe entenderse de acuerdo a los parámetros fijados por la jurisprudencia constitucional.

*Es por esto que la Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que el citado principio respecto del **presupuesto de las entidades** y órganos del Estado encuentra algunas excepciones cuando se trate de⁴:*

i) la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laborales, necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas⁵;

ii) sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones⁶; y

iii) títulos que provengan del Estado⁷ que reconozcan una obligación clara, expresa y actualmente exigible⁸. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de

² Al respecto, ver sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003 y C-192 de 2005.

³ Consejo de Estado, Sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicación número: 11001-03-27-000-2012-00044-00(19717), actor: Marlon Andrés Muñoz Guzmán, demandado: Superintendencia Financiera de Colombia.

⁴ Cfr. sentencias C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

⁵ Cfr. sentencias C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004.

⁶ Cfr. sentencia C-354 de 1997 C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002 y C-192 de 2005, entre otras.

⁷ Que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos.

⁸ Sentencia C-354 de 1997.

los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.

*Tratándose de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Corte Constitucional ha dicho que el artículo 21 del Decreto 28 de 2008⁹, teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, se ajusta a la Constitución, en la medida en que se consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP **a la vez que autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las entidades territoriales**, de modo que garantiza la destinación social constitucional del SGP sin desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral¹⁰” (Negrilla y Subrayado del Despacho)*

Finalmente, el Alto Tribunal concluyó:

*“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, **salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado**, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso. Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral.”*

Con relación a la vigencia de las excepciones a la regla general de inembargabilidad antes expuestas, el Consejo de Estado en sede de tutela, a través de la sentencia fechada el **25 de marzo de 2021**¹¹, reiteró los siguientes argumentos:

“...Siendo ello así ha precisado que, el legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación, pero que, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, por cuanto el postulado de la prevalencia del interés general comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

⁹ Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes.

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes.

¹⁰ Sentencia C-1154 de 2008.

¹¹ C.E., Sección Quinta, Exp. 20001-23-33-000-2020-00484-01(AC), mar. 25/21. C.P. Rocío Araujo Oñate.

La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; la segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, excepción que fue consagrada desde la sentencia C-354 de 1997, en la que la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación) (...)

*Las circunstancias excepcionales referidas **mantienen plena vigencia** con respecto la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación aun con la existencia en el ordenamiento del artículo 594 del Código General del Proceso, el cual debe interpretarse con los parámetros establecidos por la Corte, pues únicamente así es dable garantizar los principios y valores contenidos en la Carta, exigiéndose sí que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, lo cual ocurrió en el caso concreto y, adicionalmente, el proceso ejecutivo ha sido ineficaz para lograr el pago efectivo de la obligación, causándose intereses moratorios.*

(....)

De la ratio de las sentencias de constitucionalidad que han precisado las excepciones a la regla general de inembargabilidad, resulta forzoso concluir que el artículo 594 del Código General del Proceso debe interpretarse teniéndolas en cuenta, esto es, incluyéndolas a la hora de darle alcance en el caso concreto, a efectos de hacer efectivos derechos y principios de raigambre fundamental, respecto de los cuales la aplicación de la prohibición de embargar recursos del Presupuesto General de la Nación, los tornaría nugatorios.”

Así las cosas, debe concluirse que, si bien el Código General del Proceso en su artículo 594 ha reiterado la imposibilidad de embargar los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, de la Seguridad Social y las cuentas del Sistema General de Participación, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha considerado que dicha prohibición no es absoluta y debe ser valorada atendiendo las particularidades de cada caso. Es por ello que, en razón a que en el presente asunto se pretende el pago de una acreencia contenida en una decisión judicial, en la que inclusive se reconoció un derecho de índole laboral y a la fecha de esta providencia la entidad territorial ejecutada no ha atendido los plazos que la ley dispone para su cancelación, resulta procedente la medida solicitada

Además, en el asunto que nos ocupa la providencia que ordena seguir adelante la ejecución, se encuentra en firme y sin recurso alguno, por lo que también resulta viable acceder a decretar la medida cautelar de embargo, conforme a lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Expuesto lo anterior, se procederá a decretar la medida cautelar de embargo solicitada por la parte ejecutante y, en este sentido, se ordenará librar por secretaria los oficios a las respectivas entidades bancarias en donde el **Distrito Especial de Santiago de Cali**, tenga cuentas de ahorros y corrientes, advirtiéndole para ello, que en el caso concreto se configuran las excepciones que ha trazado la jurisprudencia, para proceder al embargo de las cuentas que hagan parte del Presupuesto General de la Nación y que tienen el carácter de inembargables, toda vez que se trata de una obligación contenida en una sentencia judicial de origen laboral.

En cuanto a la limitación del embargo, el artículo 599 del Código General del Proceso, facultó al Juez para limitar el embargo y secuestro a lo necesario, señalando para ello, que el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas.

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud objeto de estudio se enmarca en el caso regulado por el numeral 10 del artículo 593 del Código General del Proceso¹², el Despacho limitará el valor del embargo y secuestro de las cuentas de ahorros y/o corrientes que se encuentren a nombre de **Distrito Especial de Santiago de Cali**, a la suma de siete millones ochenta mil novecientos veinticinco pesos m/cte. (\$7.080.925), lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 607 del 13 de diciembre de 2021, incrementado en un diez por ciento (10%).

Esto atendiendo que, mediante el auto del 13 de diciembre de 2021, previamente referido, se dispuso tener como liquidación del crédito la realizada por el Despacho por la suma total de seis millones cuatrocientos treinta y siete mil doscientos cinco pesos m/cte. (\$ 6.437.205), por concepto de capital e intereses de mora.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECRETAR EL EMBARGO y retención de los dineros que tenga el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, identificado con Nit. 890.399.011-3, en las siguientes entidades bancarias “*Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Sudameris, Bancolombia, Banco Agrario, Banco Popular, Av Villas, Davivienda, BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha*”.

SEGUNDO: El embargo referido en el numeral anterior se limitará a la suma de la suma de **SIETE MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$7.080.925)**, lo cual corresponde al valor determinado en el auto interlocutorio No. 607 del 13 de diciembre de 2021, incrementado en un diez por ciento (10%), en atención a lo señalado en el artículo 599 del Código General del Proceso.

¹² **ART. 593. EMBARGOS.** Para efectuar embargos se procederá así: 1. (...)... 10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

TERCERO: Para la efectividad de la medida, en los términos del artículo 593 del Código General del Proceso, se **ORDENA OFICIAR** a las entidades bancarias destinatarias de la misma, para que consignen la suma retenida a órdenes de este Juzgado en la **cuenta de depósitos judiciales No. 760012045001 del Banco Agrario de Colombia**, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación.

Advertir igualmente que se trata de un proceso ejecutivo cuyo título de ejecución es una sentencia judicial en la que se reconocieron prestaciones de índole laboral, remitiendo copia a cada una de ellas del presente auto y de la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución.

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

QUINO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:


- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 087

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00021-00
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
DEMANDADO:	MARCO ANTONIO GUAITOTO DIAZ
VINCULADO:	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES – PROTECCIÓN S.A.

1. ASUNTO A DECIDIR

El Despacho se pronuncia sobre las contestaciones y excepciones formuladas por la parte demandada.

2. CONSIDERACIONES

En principio, debe indicarse que la parte demandada **Marco Antonio Guaitoto Díaz** contestó¹ la demanda de manera oportuna.

Igualmente, la **Administradora de Pensiones – Protección S.A.** presentó contestación² a la correspondiente demanda, por medio de la cual formuló la excepción perentoria de prescripción y excepciones de fondo.

De las excepciones formuladas se corrió traslado el día 08 de febrero de 2022, conforme se vislumbra de la constancia secretarial obrante en el anexo nro. 17 del expediente digital.

Ahora bien, si bien fue presentada la excepción perentoria de prescripción por parte de la **Administradora de Pensiones – Protección S.A.**, lo cierto es que debe indicarse que el Despacho no hará pronunciamiento alguno en este momento procesal de fondo y su resolución será diferida hasta el momento de dictar sentencia, toda vez que los argumentos expuestos se relacionan con el fondo del asunto.

Finalmente, el Juzgado de conformidad con el previsto en el inciso final del párrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso, dispone que no encuentra probada ninguna otra excepción de manera

¹ Anexo nro. 10 del expediente digital.
² Anexo nro. 15 del expediente electrónico.

oficiosa, con la capacidad de enervar anticipadamente el procedimiento hasta ahora surtido.

No obstante lo anterior, debe indicarse que el Despacho advierte que la parte demandada señor **Marco Antonio Guaitoto Díaz**, arribó junto con la contestación de la demanda copia de un auto admisorio proferido por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali en un proceso ordinario laboral 2020-00355, en el cual obra como demandante el señor Guaitoto Díaz y como demandada la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones E.I.C.E.**

En consecuencia, se solicitará al Despacho Judicial en comento, remita copia íntegra digital del expediente digital radicado con el nro. 2020-00355, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, a fin de determinar el objeto del mismo, en atención a lo dispuesto por el art. 161 del Código General del Proceso.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA en término por el **Marco Antonio Guaitoto Díaz** y la **Administradora de Pensiones Protección S.A.**, de conformidad con lo indicado de manera previa.

SEGUNDO: DIFERIR hasta el momento de proferir sentencia, la resolución de la excepción perentoria de prescripción formulada por la **Administradora de Pensiones Protección S.A.**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REQUERIR AL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI remita copia íntegra digital del expediente digital radicado con el nro. 2020-00355, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, conforme fue expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.

CUARTO: Una vez en firme la presente providencia continúese con el trámite procesal correspondiente.

QUINTO: RECONOCER PERSONERIA adjetiva al doctor **JOSÉ MANUEL VASQUEZ HOYOS**, identificado con cédula de ciudadana No. 16.713.414 y con Tarjeta Profesional No. 211.387 del C.S. de la J., para actuar como apoderado judicial del demandado, señor **MARCO ANTONIO GUAITOTO DÍAZ**, de conformidad con el memorial poder visible en el anexo nro. 10 del expediente electrónico del proceso.

QUINTO: RECONOCER PERSONERIA adjetiva al doctor **ROBERTO CARLOS LLAMAS MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadana No. 73.191.919 y con Tarjeta Profesional No. 233.384 del C.S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la entidad demandada, **ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A.**, de conformidad con el memorial poder visible en el anexo nro. 15 del expediente electrónico del proceso.

SEXTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SÉPTIMO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

SMD.

REPÚBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL



JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE CALI

AUTO No. 088

Santiago de Cali, Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DCHO
RADICACIÓN : 76001-33-33-001-2021-00223-00
DEMANDANTE : TRANSPORTES MONTEBELLO S.A.
DEMANDADO : DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Procede el Juzgado a resolver el llamamiento en garantía formulado por la entidad demandada en contra de la **Aseguradora Solidaria de Colombia**.

ANTECEDENTES

Mediante escrito arribado al expediente digital¹, el apoderado judicial del **Distrito Especial de Santiago de Cali** formuló el llamamiento en garantía en contra de la **Aseguradora Solidaria de Colombia**.

Para fundamentar la solicitud, afirma que el **Distrito Especial de Santiago de Cali** ampara esta clase de riesgos con la póliza de responsabilidad civil extracontractual expedida por la compañía de seguros **Aseguradora Solidaria de Colombia** (póliza nro. 420-80-994000000109), por consiguiente, la mentada póliza se encontraba vigente a la fecha del accidente, es decir, el 15 de octubre de 2019.

CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra el llamamiento en garantía en su artículo 225, en los siguientes términos:

***“Artículo 225. Llamamiento en garantía.** Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen”.

La Sección Tercera del H. Consejo de Estado respecto a los requisitos que se deben cumplir para que sea procedente esta figura, en providencia del 18 de agosto de 2021², sostuvo:

“Pues bien, la figura del llamamiento en garantía, de conformidad con el artículo 225 del CPACA3, consiste en la facultad de solicitar dentro un proceso judicial la citación de un tercero para exigirle la reparación integral de un perjuicio o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer el llamante como resultado de una eventual condena que se le imponga en sentencia, cuando afirme tener derecho legal o contractual para hacer el llamado”.

(...)

“Ahora bien, no le asiste razón al apelante cuando afirma que el escrito de llamamiento debe cumplir con los requisitos previstos en los artículos 65 y 82 del C.G.P, toda vez que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 225, reguló la figura del llamamiento en garantía para los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa; específicamente, enumeró los requisitos que debe contener el escrito por medio del cual se hace el llamamiento, a saber: i) el nombre del llamado y el de su representante; ii) el domicilio del llamado; iii) los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen, y iv) la dirección de quien hace el llamamiento y su apoderado para recibir notificaciones. En ese sentido, al existir regulación expresa sobre este asunto en particular, no hay vacío legal que permita acudir al estatuto procesal general”.

De lo anterior se infiere que el llamamiento en garantía supone la existencia de un vínculo legal o contractual que le permita al llamante solicitar la intervención del tercero con quien tenga dicho vínculo, para que una vez se produzca la decisión definitiva y ésta sea adversa a la entidad demandada, se establezca la obligación al tercero, en virtud del derecho legal o contractual, de efectuar el reembolso de lo que tuvo que pagar el demandado como resultado de la sentencia condenatoria, el cual para su procedencia debe cumplir unos requisitos formales y adicionalmente aportar prueba siquiera sumaria de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar a formular el llamamiento.

Ahora bien, descendiendo al caso bajo estudio, en lo que corresponde a la solicitud efectuada por la parte demandada en contra de las llamadas en garantía, se evidencia lo siguiente:

-. En el asunto que nos ocupa, de acuerdo a lo planteado por la entidad demandada, se establece que no existe un vínculo de naturaleza contractual que permita al **Distrito Especial de Cali** llamar en garantía a la Compañía de seguros **Aseguradora Solidaria de Colombia**.

-. En lo que corresponde a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000109, expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, se evidencia que tiene una vigencia entre los periodos comprendidos entre el 29 de mayo de 2019 y el

² Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López (E), Radicación número: 05001-23-33-000-2014-01475-01

23 de abril de 2020, fechas en las cuales se dio la manifestación de la voluntad de la Administración a través de los actos administrativos acusados (Resolución nro. 4152.010.21.0.8832 del 15 de octubre de 2019 y Resolución nro. 4152.010.21.0.0388 del 09 de abril de 2021).

-Ahora bien, revisado el objeto de la póliza no se observa que cubra los riesgos surgidos como consecuencia de la expedición de actos administrativos.

-Analizada de manera minuciosa la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-9940000000109, expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aportada con la solicitud, se extrae que en esta el objeto del seguro corresponde el de *“Amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo los perjuicios morales y de vida en relación y el lucro cesante, que cause a terceros el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con la Ley colombiana, durante el giro normal de sus actividades”*.

De este modo, se tiene que en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pretensiones de la demanda están encaminadas a obtener la nulidad de los actos administrativos que impusieron una infracción de tránsito a la empresa demandante y del acto que resolvió el respectivo recurso de reposición, pretensiones que tienen como fundamentos los cargos de nulidad alegados y no son producto de la responsabilidad civil extracontractual de la entidad demandada.

Caso similar al estudiado por el superior funcional Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que mediante providencia nro. 100 del 02 de agosto de 2020³, confirmó la decisión de negar el llamamiento en garantía bajo los mismos argumentos, así:

“Conforme a lo anterior, tal como lo señaló la juez de primera instancia, el documento aportado no denota la existencia de una relación sustancial entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y MAPFRE SEGUROS S.A. en lo que respecta al asunto que nos atañe, tendiente a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se impuso una sanción pecuniaria al demandante, si en cuenta se tiene que la aludida póliza fue suscrita con el fin de amparar los siniestros ocurridos con ocasión de la responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable al asegurado”.

Por tanto, en sentir de esta juzgadora la póliza aportada tienen cobertura para aquellos casos de medio de control de reparación directa, a través de la cual se alegue la responsabilidad civil extracontractual del **Distrito Especial de Santiago de Cali**, más aun si se tiene en cuenta que dicho ente territorial suscribe pólizas de responsabilidad de servidores públicos con el fin de amparar la responsabilidad surgida por actos o hechos no dolosos ocurridos en el ejercicio de sus funciones (actos administrativos).

En consecuencia, al no existir un vínculo de naturaleza contractual que ampare lo aquí controvertido entre la entidad demandada y las aseguradoras llamadas en garantía, se procederá a negar la solicitud del llamamiento al no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 225 del CPACA.

En virtud de lo anterior, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**,

³ Radicación nro. 76001-33-33-001-2019-00064-01.

R E S U E L V E:


PRIMERO: NEGAR el llamamiento en garantía formulado por el **Distrito Especial de Santiago de Cali** en contra de la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA adjetiva como apoderada judicial del **Distrito Especial de Santiago de Cali** al abogado **ABEL DE JESÚS QUINTERO ROJAS**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 70.385.563 y T.P nro. 185.180 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines del poder obrante en el anexo nro. 006 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

smd

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00014-00
DEMANDANTE:	YORIAN VARIEL OCORO VELEZ
DEMANDADO:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Auto Interlocutorio No. 089

I. ASUNTO

El Despacho procede a analizar el impedimento formulado por el Juez 21 Administrativo del Circuito de Cali mediante auto nro. 888 del 02 de diciembre de 2021.

Una vez declarado fundado el impedimento en mención, se dispondrá sobre la admisión o no de la demanda de Reparación Directa presentada por el señor **Yorian Variel Ocoro**, en contra del **Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec**. En ella se solicita se declare administrativamente a la entidad demandada por las lesiones y perjuicios sufridos por el demandante dentro del penal.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Previo a decidir sobre la admisión de la demanda, el Despacho considera procedente declarar fundado el impedimento alegado por el Dr. **CARLOS EDUARDO CHAVES ZUÑIGA**, en calidad de Juez 21 Administrativo Oral del Circuito de Cali, a la luz de lo dispuesto por el art. 144 de la Ley 1564 de 2012.

Lo anterior, pues si bien no se acredita sumariamente el lazo de consanguineidad entre el funcionario en mención y la apoderada judicial de la parte demandante Dra. **CLAUDIA PATRICIA CHAVES MARTÍNEZ**, lo cierto es que en su calidad de servidores público dicha manifestación la realiza bajo la gravedad de juramento; situación ante la cual procede la causal de impedimento alegada.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 2080 del 25 de enero de 2021, se reformó la ley 1437 de 2011 y se dictaron otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

El artículo 86 de la ley 2080 de 2021, respecto al régimen de vigencia y transición normativa, consagra lo siguiente:

“La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.** (Resaltado fuera del texto)

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.”

La Jurisprudencia del Consejo de Estado¹ al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que *“la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.*

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal y, teniendo en cuenta que se cumplen con los requisitos consagrados en el artículo 162 del CPACA, modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2020 y demás normas concordantes y al contar con la competencia necesaria para el trámite del medio de control, el despacho procederá a admitir la demanda.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1º. DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO alegado por el **Dr. CARLOS EDUARDO CHAVES ZUÑIGA**, en calidad de Juez 21 Administrativo Oral del Circuito de Cali, de conformidad con la parte considerativa de la presente decisión.

2º ADMITIR la presente demanda interpuesta por el señor **YORIAN VARIEL OCORO VELEZ**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.107.097.496, dentro del proceso de la referencia.

3º. NOTIFICAR por estado electrónico esta providencia a la parte actora, según se establece en los artículos 171 y 201 de la ley 1437 de 2011, este último modificado por el artículo 50 de la ley 2080 de 2021.

4º. ENVÍESE mensaje de datos a la entidad accionada **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del CPACA, modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2021, la notificación personal de la demanda a la **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC** se limitará únicamente al envío de esta providencia, como quiera que el apoderado judicial de la parte actora, remitió copia de la demanda y sus anexos a esta entidad a través del correo electrónico de notificaciones judiciales: demandas4.roccidente@inpec.gov.co y juridica.cojamundi@inpec.gov.co.

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018) CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ REF: Expediente núm. 66001-23-33-000-2017-00474-01.

5º. ENVÍESE mensaje de datos al **MINISTERIO PÚBLICO**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, a través de la doctora MARIA ELENA CAICEDO YELA, Procuradora Judicial 57, al correo electrónico de notificaciones judiciales: procjudadm57@procuraduria.gov.co, al cual se deberá adjuntar copia de la demanda y sus anexos.

6º. ENVÍESE mensaje de datos a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, al correo electrónico de notificaciones judiciales: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, al cual se deberá adjuntar copia de la demanda y sus anexos.

7º. CORRER traslado de la demanda por el término de 30 días, de conformidad con el artículo 172 de la ley 1437 de 2011, término que empezará a contabilizar conforme se determina en el artículo 199 de la misma ley, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, esto es, a los **dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente**.

El escrito de contestación de la demanda, las pruebas que se aporten con dicho escrito y sus anexos, deberán ser enviados de manera electrónica o digital al correo electrónico de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Así mismo, se advierte a la parte demandada que, con la contestación de la demanda deberá aportar el correo electrónico de notificaciones judiciales de la misma y el correo electrónico del apoderado judicial de la entidad, tal y como lo dispone el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, mediante el cual se modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.

8º. CONFORME lo dispone el numeral 4º y el párrafo 1º del artículo 175 del C.P.A.C.A. La(s) entidad (es) accionada (s) deberá (n) aportar con la contestación de la demanda, todas las pruebas que se encuentren en su poder y que pretenda (n) hacer valer en el proceso y el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del litigio. La omisión de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.

Esta documentación deberá ser enviada en forma digital o electrónica al correo electrónico de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

9º. SE ADVIERTE a la parte demandante que, surtido el traslado de la demanda, correrán diez (10) días, término en el cual podrá adicionar aclarar o modificar la demanda, por una sola vez (art. 173 de la ley 1437 de 2011).

10º. GASTOS PROCESALES. Dado que para el trámite de la presente etapa del proceso no se requieren recursos adicionales, el Despacho se abstiene de fijar gastos del proceso; lo anterior, sin perjuicio que al requerirse de alguna expensa, ésta se fije en providencia posterior.

11º. RECONOCER PERSONERÍA para actuar como apoderada de la parte accionante a la abogada **CLAUDIA PATRICIA CHAVES MARTÍNEZ**, identificada con C.C 34.539.701 de Popayán y portadora de la T.P. 72.633 del C.S de la Judicatura, de conformidad con el poder obrante en el expediente.

12º. De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011², se **ADVIERTE A LOS**

² Consagra el inciso segundo del artículo 186 de la ley 2080 de 2021, en su parte final que “Las partes y sus apoderados...” “darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso”.

SUJETOS PROCESALES del presente asunto que deben enviar un ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co.

13º. Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

SMD


El numeral 14 del artículo 78 del CGP, estipula lo siguiente: “ART. 78. Deberes de las partes y sus apoderados (...)

“14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smmlmv) por cada infracción”.

CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho el presente proceso para la aprobación de la liquidación de costas realizada.



ADRIANA GIRALDO VILLA
Secretaria

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto No. 121

MEDIO DE CONTROL	REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE	HARBEEY PAZ PULISTAR Y OTROS
DEMANDADO	FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y RAMA JUDICIAL ADMON JUDICIAL
RADICADO	76001-33-33-001-2015-00065-00

I. ASUNTO:

Procede el Despacho a resolver sobre la liquidación de costas efectuada dentro del proceso de Reparación Directa, demandante Harbey Paz Pulistar Y Otros contra la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, bajo radicación 76001-33-33-001-2015-00065-00.

CONSIDERACIONES:

En cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en el numeral 1º del artículo 366 del Código General del Proceso, se procederá a impartir aprobación a la liquidación de costas realizada por la Secretaría del Despacho, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a los parámetros establecidos por el legislador para efectuar su cálculo y, los valores allí establecidos corresponden a las agencias en derecho fijadas en la sentencia correspondiente.

No habiendo más diligencias por practicar, se ordenará el archivo de lo actuado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: **IMPARTIR** aprobación a la liquidación de costas, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, **ARCHÍVESE** lo actuado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,


PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

Radicado No. 76001-33-33-001-2015-00065-00

CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho el presente proceso para la aprobación de la liquidación de costas realizada.



ADRIANA GIRALDO VILLA
Secretaria

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto No. 122

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLCIMIENTO DEL DERECHO LABORAL
DEMANDANTE	AYDA CRISTINA SANCHEZ BERMUDEZ
DEMANDADO	LA NACION-MINEDUCACION-FOMAG
RADICADO	76001-33-33-001-2018-00016-00

I. ASUNTO:

Procede el Despacho a resolver sobre la liquidación de costas efectuada dentro del proceso de Reparación Directa, demandante **AYDA CRISTINA SANCHEZ BERMUDEZ** s contra la **LA NACION-MINEDUCACION-FOMAG**, bajo radicación 76001-33-33-001-2018-00016-00.

CONSIDERACIONES:

En cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en el numeral 1º del artículo 366 del Código General del Proceso, se procederá a impartir aprobación a la liquidación de costas realizada por la Secretaría del Despacho, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a los parámetros establecidos por el legislador para efectuar su cálculo y, los valores allí establecidos corresponden a las agencias en derecho fijadas en la sentencia correspondiente.

No habiendo más diligencias por practicar, se ordenará el archivo de lo actuado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: **IMPARTIR** aprobación a la liquidación de costas, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, **ARCHÍVESE** lo actuado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,


PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

Radicado No. 76001-33-33-001-2018-00016-00

CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho el presente proceso para la aprobación de la liquidación de costas realizada.



ADRIANA GIRALDO VILLA
Secretaria

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto No. 123

MEDIO DE CONTROL	REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE	CARLOS AUGUSTO CALDERON ARDILA
DEMANDADO	NACION-MINDEFENSA-JUSTICIA PENAL MILITAR
RADICADO	76001-33-33-001-2015-00143-00

I. ASUNTO:

Procede el Despacho a resolver sobre la liquidación de costas efectuada dentro del proceso de Reparación Directa, demandante Carlos Augusto Calderón Ardila contra NACION-MINDEFENSA-JUSTICIA PENAL MILITAR, bajo radicación 76001-33-33-001-2015-00143-00.

CONSIDERACIONES:

En cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en el numeral 1º del artículo 366 del Código General del Proceso, se procederá a impartir aprobación a la liquidación de costas realizada por la Secretaría del Despacho, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a los parámetros establecidos por el legislador para efectuar su cálculo y, los valores allí establecidos corresponden a las agencias en derecho fijadas en la sentencia correspondiente.

No habiendo más diligencias por practicar, se ordenará el archivo de lo actuado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:

PRIMERO: **IMPARTIR** aprobación a la liquidación de costas, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, **ARCHÍVESE** lo actuado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,


PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

Radicado No. 76001-33-33-001-2015-00143-00

CONSTANCIA SECRETARIAL: A despacho el presente proceso para la aprobación de la liquidación de costas realizada.



ADRIANA GIRALDO VILLA
Secretaria

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de Febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto No. 124

MEDIO DE CONTROL	REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE	JASON ALVAREZ ZAMBRANO Y OTROS
DEMANDADO	NACION- MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL.
RADICADO	76001-33-33-001-2015-00148-00

I. ASUNTO:

Procede el Despacho a resolver sobre la liquidación de costas efectuada dentro del proceso de Reparación Directa, demandante Jason Álvarez Zambrano Y Otros contra Nación- Ministerio de defensa Policía Nacional., bajo radicación 76001-33-33-001-2015-00148-00.

CONSIDERACIONES:

En cumplimiento de los presupuestos legales contenidos en el numeral 1º del artículo 366 del Código General del Proceso, se procederá a impartir aprobación a la liquidación de costas realizada por la Secretaría del Despacho, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a los parámetros establecidos por el legislador para efectuar su cálculo y, los valores allí establecidos corresponden a las agencias en derecho fijadas en la sentencia correspondiente.

No habiendo más diligencias por practicar, se ordenará el archivo de lo actuado.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE:


PRIMERO: **IMPARTIR** aprobación a la liquidación de costas, conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, **ARCHÍVESE** lo actuado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

Radicado No. 76001-33-33-001-2015-00148-00

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto de Sustanciación No. 125.

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00179-00
DEMANDANTE:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
DEMANDADO:	JORGE LUIS BELTRAN BUENAVENTURA

Mediante auto No. 014 del 19 de enero de 2021, se dispuso fijar el litigio y se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes intervinientes, decisión que se encuentra en firme y sin recurso alguno.

Por tanto, en virtud de lo previsto en el párrafo del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011¹, el Despacho indica que en el presente asunto se configuran las causales descritas en los literales b) y c) del numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, para proferir sentencia anticipada, como quiera que no hay pruebas por practicar y las documentales aportadas con la demanda y su contestación, no fueron tachadas o desconocidas por las partes.

Así las cosas, se procederá a correr traslado para alegar de conclusión por el término de diez (10) días, conforme a lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Dentro de la misma oportunidad podrá la señora Agente del Ministerio Público emitir su concepto si a bien lo tiene.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE

PRIMERO: CORRER traslado para **ALEGAR DE CONCLUSIÓN** por el término de diez (10) días conforme a lo previsto por el artículo 181 del CPACA, en concordancia con lo establecido en el artículo 182A ibídem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Dentro de la misma oportunidad podrá la señora Agente del Ministerio Público emitir su concepto si a bien lo tiene.

¹ **PARÁGRAFO.** En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.

Surtido el anterior término se proferirá sentencia por escrito.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, se ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES que deben enviar un ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto de Sustanciación No. 126.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2019-00079-00
DEMANDANTE:	SULMARY ROMERO RESTREPO Y OTROS
DEMANDADO:	EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Teniendo en cuenta que la apoderada judicial de la parte demandante mediante memorial radicado el día 18 de enero de 2022, manifestó que el señor Víctor Manuel Orozco, tenía fecha de valoración el 20 de enero de 2022 y de manera telefónica informó que efectivamente fue valorado, se procede a **REQUERIR** al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que en el término de cinco (05) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, allegue al proceso el dictamen pericial practicado al demandante Víctor Manuel Orozco.

Esta prueba deberá ser remitida a través de los canales digitales del Juzgado:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: **(2) 896-24-12**
 (2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto de Sustanciación No. 127.

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00189-00
DEMANDANTE:	LUIS HERNANDO HERRERA MONTILLA
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Mediante auto No. 031 del 31 de enero de 2021, se dispuso fijar el litigio y se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes intervinientes, decisión que se encuentra en firme y sin recurso alguno.

Por tanto, en virtud de lo previsto en el párrafo del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011¹, el Despacho indica que en el presente asunto se configuran las causales descritas en los literales b) y c) del numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, para proferir sentencia anticipada, como quiera que no hay pruebas por practicar y las documentales aportadas con la demanda y su contestación, no fueron tachadas o desconocidas por las partes.

Así las cosas, se procederá a correr traslado para alegar de conclusión por el término de diez (10) días, conforme a lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Dentro de la misma oportunidad podrá la señora Agente del Ministerio Público emitir su concepto si a bien lo tiene.

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,

RESUELVE

PRIMERO: CORRER traslado para **ALEGAR DE CONCLUSIÓN** por el término de diez (10) días conforme a lo previsto por el artículo 181 del CPACA, en concordancia con lo establecido en el artículo 182A ibídem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Dentro de la misma oportunidad podrá la señora Agente del Ministerio Público emitir su concepto si a bien lo tiene.

¹ **PARÁGRAFO.** En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.

Surtido el anterior término se proferirá sentencia por escrito.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, se ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES que deben enviar un ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto de Sustanciación No. 128.

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – OTROS ASUNTOS
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00199-00
DEMANDANTE:	HERNAN RAMIRE ULLOA
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Teniendo en cuenta que en el numeral primero del auto interlocutorio No. 032 del 31 de enero de 2022, se incurrió en un error de digitalización al momento de señalar la oportunidad en que fue contestada la demanda por parte de la entidad accionada, se **ACLARA** que la entidad demandada, Distrito Especial de Santiago de Cali, contestó en forma oportuna la demanda, conforme a la constancia secretarial que obra en el documento 06 del expediente electrónico del proceso, motivo por el cual en dicha providencia se dispuso sobre las excepciones formuladas.

Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Auto de Sustanciación No. 129.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00150-00
DEMANDANTE:	MARTIN ALONSO PALTA LUNA
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE CANDELARIA – INGENIO DE MAYAGUEZ S.A.
LLAMADO EN GARANTÍA:	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Y SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Teniendo en cuenta la constancia secretarial que antecede y como quiera que el auto No. 061 del 08 de febrero de 2022, a través del cual se dispuso sobre las excepciones formuladas por las entidades accionada y llamadas en garantía, se encuentra en firme y sin recurso alguno, se procederá a fijar fecha para celebrar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, diligencia que tiene por objeto, entre otros, proveer sobre el saneamiento, fijar el litigio, someter a conciliación el asunto y decretar las pruebas solicitadas por las partes aquí intervinientes.

La audiencia inicial que se llevará a cabo de manera virtual, a través del aplicativo *lifesize*, es obligatoria para los apoderados judiciales de las partes, so pena de las sanciones de ley.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,**

RESUELVE:

PRIMERO: Se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, **el día siete (07) de abril de dos mil veintidós (2022), a las 10:00 de la mañana,** la cual se realizará de manera virtual a través del aplicativo *lifesize*.

SEGUNDO: Por secretaría se enviará el link respectivo para la celebración de la audiencia a los correos electrónicos para notificaciones judiciales aportado por las partes, dentro de los cinco (5) días anteriores a la celebración de la referida diligencia. Es deber de los sujetos procesales comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior.

TERCERO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 201, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUARTO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12 // (2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

LCMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)


Auto de Sustanciación No. 130

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EJECUTANTE	HECTOR FABIO PUENTE SINISTERRA Y OTROS
EJECUTADO	MUNICIPIO DE YUMBO
RADICADO	76001-33-33-001-2021-00166-00

Teniendo en cuenta que la apoderada judicial de la entidad ejecutada, **MUNICIPIO DE YUMBO**, mediante escrito allegado a través de los canales digitales del Juzgado el 24 de enero de 2022, contestó oportunamente la demanda ejecutiva y propuso excepciones de mérito, en especial la excepción de pago de la obligación, formulada bajo el título de “*AUSENCIA DE TITULO EJECUTIVO*”, el Despacho procede a **CORRER TRASLADO** de la mismas, por el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este proveído, a efectos de que la parte ejecutante se pronuncie al respecto y, adjunte o pida las pruebas que pretenda hacer valer, tal como lo dispone el numeral 1º del artículo 443 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2019-00050-00
DEMANDANTE:	MARÍA DEL CARMEN GIRALDO ALBA
VINCULADA:	MARÍA PERSIDES GARCIADE GARCÍA
DEMANDADO:	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR -

Auto Interlocutorio No. 074

1. ASUNTO A DECIDIR

En principio, debe indicarse que la parte vinculada, señora María Persides García, a través de apoderado judicial, contestó la demanda en la cual propuso excepciones

De las excepciones formuladas se corrió traslado el día 04 de noviembre de 2021, conforme se vislumbra en el expediente digital.

Con la entrada en vigencia de la ley 2080 de 2021 se introdujeron modificaciones en el proceso contencioso administrativo que afectan el trámite de las excepciones previas y que conllevan a que su resolución se efectúe con anterioridad a la realización de la audiencia inicial.

La Jurisprudencia del Consejo de Estado¹ al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que “la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 , el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

A su turno el artículo 86 de la ley 2080 de 2021 estableció su régimen de entrada en vigencia bajo los siguientes parámetros:

“ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. *La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.*

¹ C.E., Sección Primera. Exp. 66001-23-33-000-2017-00474-01. 08/03/2018. C.P. María Elizabeth García González.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos [218](#) a [222](#) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo [624](#) del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley [1437](#) de 2011.

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.”

En este contexto, frente al trámite de las excepciones previas, el artículo 38 de la ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 175 del CPACA en su parágrafo 2 consagra lo siguiente:

“PARÁGRAFO 2o. *De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo [201A](#) por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.*

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos [100](#), [101](#) y [102](#) del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo [101](#) del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicarán. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo [182A](#).”

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal y teniendo en cuenta que en el caso concreto el término de traslado se encuentra debidamente agotado, se procederá a resolver las excepciones previas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2º del artículo 101

del Código General del proceso, esto es, mediante providencia antes de la audiencia inicial.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Excepciones formuladas por la parte vinculada.

2.1.1. Excepción previa Ineptitud de la demanda – indebida integración de pretensiones.

El apoderado judicial de la señora María Persides García, quien fue vinculada al presente proceso, al momento de contestar la demanda expuso que, las pretensiones formuladas con la demanda no se encuentran debidamente integradas.

Ahora bien, de conformidad con el numeral 5º del artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la excepción previa de ineptitud de la demanda se configura en el evento en que la misma no cumple con los requisitos formales o, en su defecto, cuando se genera una indebida acumulación de pretensiones.

En este sentido, el Consejo de Estado ha sido enfático en precisar que la mentada excepción, solo atañe a los requisitos formales de la demanda o a la indebida acumulación de pretensiones de la siguiente manera:

“Antes de abordar el estudio del problema jurídico propuesto, se deben realizar algunas precisiones preliminares sobre la denominada «ineptitud sustantiva de la demanda». Al respecto esta subsección ha señalado que con anterioridad se ha hecho alusión a esta figura como si se tratara de una excepción previa o causal de rechazo de la demanda y en últimas, como sustento de decisiones inhibitorias, lo cual constituye una imprecisión¹.

Ello, toda vez que sólo es viable proponer y declarar próspera la excepción previa de «ineptitud de la demanda por la falta de cualquiera de los requisitos formales» o «por la indebida acumulación de pretensiones» y; en relación con otras situaciones, se debe acudir a las demás excepciones previas previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, sin que haya vocación para realizar una denominación en términos diferentes a los señalados por la ley.

Así mismo, se recalcó que al encontrarse otras falencias que otrora han servido como sustento para la declaratoria de una «ineptitud sustantiva de la demanda», en lugar de acudir a esa denominación, se deben utilizar las herramientas que los estatutos procesales prevén para tal efecto, tal como se analizó extensamente en el auto en cita, esto es, aquellos mecanismos de saneamiento como por ejemplo ordenar corregir la demanda o dejar sin efecto el auto admisorio para proceder al rechazo de la misma en atención a la causal legalmente prescrita para el efecto²”.

² Auto del 26 de septiembre de 2019, proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-02179-02(4465-17)

A sí las cosas, a la luz de dicha excepción se debe analizar en el caso bajo estudio, si las pretensiones formuladas en la demanda cumple o no, con la exigencias del artículo 162 numeral 2 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, analizado el escrito de demanda, se logra observar que las pretensiones formuladas por la parte demandante tienen congruencia con los hechos en los cuales se basó la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho laboral, igualmente se advierte que dichas pretensiones se encuentran acordes al medio de control incoado. Por lo tanto no encuentra este Despacho que dicha excepción de ineptitud sustantiva de la demanda deba prosperar.

Por otra parte, el apoderado judicial de la parte demandante propone las excepciones de: cosa juzgada, prescripción, caducidad, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, sin embargo, dichas excepciones se encuentran meramente enunciadas, es decir, no se vislumbran los fundamentos en los cuales se basa para proponerlas, tal como lo dispone el artículo 101 del Código General del proceso, que reza:

“ARTÍCULO 101. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS. *Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado **que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan.** Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.*

El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios

(...)” (Negrilla del Despacho)

Por lo anterior y encontrándose que las excepciones formuladas no cuentan con razones ni fundamentos para su respectiva sustentación, este Despacho se abstendrá de resolver las mismas.

Finalmente, el Juzgado de conformidad con el previsto en el inciso final del párrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 100 del Código General del Proceso, dispone que no encuentra probada excepción alguna de manera oficiosa, con la capacidad de enervar anticipadamente el procedimiento hasta ahora surtido.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA por la vinculada María Persides García de García, de conformidad con lo indicado de manera previa.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción previa de “*Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales – pretensiones indebidamente integradas*” formulada por el apoderado judicial de la vinculada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez en firme la presente providencia continúese con el trámite procesal correspondiente.

CUARTO: RECONOCER PERSONERIA adjetiva al doctor **JOSÉ ANTONIO HERRERA VIDAL**, identificado con cédula de ciudadana No. 94.225.423 y con Tarjeta Profesional No. 99.274 del C.S. de la J., para actuar como apoderado judicial de la parte vinculada, **MARÍA PERSIDES GARCÍA DE GARCÍA**, de conformidad con el memorial poder visible en el expediente digital.

QUINTO: De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen en el curso del proceso, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SEXTO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 del CPACA, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>


Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

LMS

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00006-00
DEMANDANTE:	SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A
DEMANDADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – SECCIONAL PALMIRA

Auto Interlocutorio No. 075

I. ASUNTO

Procede el Despacho a estudiar la admisión del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter tributario.

II. CONSIDERACIONES

Realizado el estudio preliminar del presente medio de control, el Despacho advierte que, el presente asunto debe ser inadmitido para que el apoderado judicial de la parte demandante subsane las siguientes irregularidades:

1. Estimación razonada de la cuantía:

Revisado el escrito de demanda, este Despacho no observa acápite de estimación razonada de la cuantía, por lo tanto, la parte accionante deberá en el término otorgado para subsanar, la cuantía del presente asunto. Lo anterior con el fin de determinar la competencia.

2. Correo de notificaciones judiciales de las partes:

No obra en el expediente la designación de ninguno de los extremos de la Litis, así como tampoco se avizora en el acápite de notificaciones, el correo electrónico de la entidad demandada, ni el correo personal o institucional de la apoderada judicial de la parte demandante,

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la presente demanda interpuesta por **SERVICIOS DE COSECHA MANUELITA S.A.**, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la parte demandante que subsane las deficiencias referidas dentro del término máximo de diez (10) días contados a partir del día

siguiente a la notificación por estado electrónico de este auto.

TERCERO: Atender igualmente lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el numeral 7 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, respecto del escrito de subsanación de la demanda.

CUARTO: Este Juzgado acatando el deber consagrado en el art. 46 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:


- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00021-00
DEMANDANTE:	JUAN PABLO JIMÉNEZ LEDESMA
DEMANDADO:	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Auto Interlocutorio No. 076

I. ASUNTO

Procede el Despacho a estudiar la admisión del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral.

El señor Juan Pablo Jiménez Ledesma, presenta demanda de nulidad y restablecimiento de carácter laboral, en contra del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, con el fin de obtener la nulidad del Oficio S-2021-196111 del 09 de junio de 2021, mediante el cual la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., negó la solicitud de actualización en el Escalafón Nacional Docente y la nulidad del Oficio 4143.020.13.1.953014065 del 13 de julio de 2021, mediante el cual la Secretaría de Educación de Cali, negó la solicitud de actualización en el Escalafón Nacional Docente, así como el reconocimiento y pago de los salarios correspondientes al grado 3ª con maestría.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la competencia por factor territorial, el artículo 156 de la Ley 2080 de 2021 dispone:

(...)

*3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el **último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios**. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar". (Negrilla del Despacho)*

De acuerdo con lo anterior, del escrito de demanda se logra verificar que el demandante en la actualidad presta sus servicios en la ciudad de Santiago de Cali, por lo tanto, este Juzgado es competente para conocer del presente asunto.

Ahora, en lo que tiene que ver con la acumulación subjetiva de pretensiones, el artículo 88 del Código General del Proceso, indica:

“ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. *El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:*

- 1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.*
- 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
- 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.*

En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando provengan de la misma causa.*
- b) Cuando versen sobre el mismo objeto.*
- c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.*
- d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.*

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado”.

Así pues, decantado lo anterior, resuelta claro que el presente asunto puede ser conocido en su totalidad por esta Juzgadora, toda vez que las pretensiones cumplen con los requisitos expuestos anteriormente.

Es importante advertir también que la acumulación de pretensiones dentro de un proceso judicial propende por garantizar el principio de economía procesal, en razón a que, según unos requisitos legales, se permite que un solo juez pueda pronunciarse sobre los mismos pedimentos en una providencia. Esta figura resulta también acorde con los principios de igualdad y seguridad jurídica, pues decidir varias pretensiones en un solo proceso impide la existencia de decisiones contradictorias.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Con la entrada en vigencia de la ley 2080 del 25 de enero de 2021, se reformó la ley 1437 de 2011 y se dictaron otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción.

El artículo 86 de la ley 2080 de 2021, respecto al régimen de vigencia y transición normativa, consagra lo siguiente:

“La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.

Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

*De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, **las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.***
(Resaltado fuera del texto)

En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.”

La Jurisprudencia del Consejo de Estado¹ al referirse a la entrada en vigencia de la ley procesal señala que *“la misma resulta de aplicación inmediata y prevalece sobre las anteriores, a partir de su entrada en vigencia o de la fecha de su promulgación, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, el cual prevé que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.*

Con base en los anteriores parámetros, atendiendo los postulados del principio de aplicación inmediata de la ley procesal y teniendo en cuenta que se cumplen con los requisitos consagrados en el artículo 162 del CPACA, modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2020 y demás normas concordantes y al contar con la competencia necesaria para el trámite del medio de control, el despacho procederá a admitir la demanda.

En consecuencia, el Juzgado,

RESUELVE

1. ADMITIR la presente demanda interpuesta por el señor **JUAN PABLO JIMÉNEZ LEDESMA**, dentro del proceso de la referencia.

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018) CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ REF: Expediente núm. 66001-23-33-000-2017-00474-01.

2. NOTIFICAR por estado electrónico esta providencia a la parte actora, según se establece en los artículos 171 y 201 de la ley 1437 de 2011, este último modificado por el artículo 50 de la ley 2080 de 2021.

3. ENVÍESE mensaje de datos a la parte accionada **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021.

De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del CPACA, modificado y adicionado por el artículo 35 de la ley 2080 de 2021, la notificación personal de la demanda a la parte demandada **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** se limitará únicamente al envío de esta providencia, como quiera que el apoderado judicial de la parte actora, remitió copia de la demanda y sus anexos a dichas entidades a través del correo electrónico de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@cali.gov.co; notificajuridicased@educacionbogota.edu.co.

Este correo fue enviado el día 31 de enero de 2022, a las 16:55 p. m, desde el correo electrónico de la parte demandante: mrabogadosasociados23@hotmail.com.

4. ENVÍESE mensaje de datos al **MINISTERIO PÚBLICO**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, a través de la doctora MARIA ELENA CAICEDO YELA, Procuradora Judicial 57, al correo electrónico de notificaciones judiciales: procjudadm57@procuraduria.gov.co, al cual se deberá adjuntar copia de la demanda y sus anexos.

5. ENVÍESE mensaje de datos a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, conforme lo dispone el artículo 199 CPACA, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, al correo electrónico de notificaciones judiciales: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, al cual se deberá adjuntar copia de la demanda, sus anexos y la subsanación de la misma.

6. CORRER traslado de la demanda por el término de 30 días, de conformidad con el artículo 172 de la ley 1437 de 2011, término que empezará a contabilizar conforme se determina en el artículo 199 de la misma ley, modificado por el artículo 48 de la ley 2080 de 2021, esto es, a los **dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente**.

El escrito de contestación de la demanda, las pruebas que se aporten con dicho escrito y sus anexos, deberán ser enviados de manera electrónica o digital al correo electrónico de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Así mismo, se advierte a la parte demandada que, con la contestación de la demanda deberá aportar el correo electrónico de notificaciones judiciales de la misma y el correo electrónico del apoderado judicial de la entidad, tal y como lo dispone el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, mediante el cual se modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011.

7. CONFORME lo dispone el numeral 4º y el párrafo 1º del artículo 175 del C.P.A.C.A. La(s) entidad (es) accionada (s) deberá (n) aportar con la contestación de la demanda, todas las pruebas que se encuentren en su poder y que pretenda (n) hacer valer en el proceso y el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del litigio. La omisión de este deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.

Esta documentación deberá ser enviada en forma digital o electrónica al correo electrónico de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

8. SE ADVIERTE a la parte demandante que, surtido el traslado de la demanda, correrán diez (10) días, término en el cual podrá adicionar aclarar o modificar la demanda, por una sola vez (art. 173 de la ley 1437 de 2011).

9. GASTOS PROCESALES. Dado que para el trámite de la presente etapa del proceso no se requieren recursos adicionales el Despacho se abstiene de fijar gastos del proceso; lo anterior, sin perjuicio que al requerirse de alguna expensa ésta se fije en providencia posterior.

10. RECONOCER PERSONERÍA para actuar como apoderado principal de la parte accionante al abogado **HAROLD MOSQUERA RIVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.691.540 y portador de la tarjeta profesional No. 60.181, expedida por el C.S de la Judicatura, y en calidad de apoderada sustituta a la abogada LUS KARIME CASTILLO LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.832.089 y portadora de la tarjeta profesional No. 230.998 expedida por el C.S de la Judicatura, de conformidad con el poder obrante en el expediente

11. De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011², se **ADVIERTE A LOS SUJETOS PROCESALES** del presente asunto que deben enviar un

² Consagra el inciso segundo del artículo 186 de la ley 2080 de 2021, en su parte final que “Las partes y sus apoderados...” “darán cumplimiento al deber establecido en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso”.

El numeral 14 del artículo 78 del CGP, estipula lo siguiente: “ART. 78. Deberes de las partes y sus apoderados (...)

“14. Enviar a las demás partes del proceso después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Se exceptúa la petición de medidas cautelares. Este deber se cumplirá a más tardar el día siguiente a la presentación del memorial. El incumplimiento de este deber no afecta la validez de la actuación, pero la parte afectada podrá solicitar al juez la imposición de una multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) por cada infracción”.

ejemplar de los memoriales presentados, a los canales digitales o correos electrónico de los demás sujetos procesales, simultáneamente con copia incorporada al mensaje de datos enviado a este Despacho judicial a través del correo de recepción de memoriales de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos: of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co.

12. Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12


(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LMS

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00023-00
DEMANDANTE:	MARÍA DE JESÚS BOLÍVAR BUITRAGO
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE e INSPECCIÓN DE POLICÍA DE PRADERA, VALLE

Auto Interlocutorio No. 077

I. ASUNTO

Procede el Despacho a estudiar sobre la admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho propuesto por la señora María de Jesús Bolívar Buitrago en contra del municipio de Pradera, Valle y la Inspección de Policía de Pradera, Valle.

II. ANTECEDENTES

La señora María de Jesús Bolívar Buitrago, actuando a través de apoderado judicial presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por el inspector de policía municipal de Pradera Rubiel Hernán Pava Mejía mediante la Resolución N° 020 del 25 de marzo del 2021; y el acto administrativo expedido por el alcalde Justino Sinesterra Sinesterra del municipio de Pradera mediante la Resolución N° 282 del 13 de septiembre del 2021, en los cuales restablecen el uso de una servidumbre de tránsito que nunca ha existido sobre el predio de la demandante.

III. CONSIDERACIONES.

Sea lo primero indicar que el artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que asuntos se encuentran exceptuados del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, indicando expresamente en su numeral 3° que no serán objeto de control jurisdiccional, las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la Ley.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que las decisiones proferidas por autoridades administrativas, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales excepcionales que le otorga la Ley para desarrollar juicios policivos, se encuentran vedados del control judicial por parte de esta jurisdicción como lo establece el artículo ibídem.

Acerca de este asunto, la Corte Constitucional en Sentencia T – 267 de 2011, precisó que:

“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en resaltar que cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales”. Por su naturaleza de actos jurisdiccionales, frente a las decisiones de los organismos de policía no es posible ejercitar los mecanismos propios de la jurisdicción contencioso administrativa, situación que es reconocida por el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, que sostiene que “[l]a jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”. Igualmente, “ni la acción reivindicatoria, ni la posesoria, ni la restitutoria de la tenencia están configuradas para salvaguardar el derecho al debido proceso en los procesos policivos, sino –según el caso- los derechos de dominio, posesión y tenencia”. Esta situación en la que se aprecia que no existen mecanismos adecuados para salvaguardar el derecho al debido proceso en las actuaciones de las autoridades de policía en tratándose de lanzamientos, hace necesario reconocer que es solo la acción de tutela el mecanismo a partir del cual es posible conseguir la protección requerida.”.

Por su naturaleza de actos jurisdiccionales, frente a las decisiones de los organismos de policía no es posible ejercitar los mecanismos propios de la jurisdicción contencioso administrativa, situación que es reconocida por el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, que sostiene que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”.

Por su parte, el Consejo de Estado¹, refiriéndose a éste asunto, manifestó que:

“(…) Los juicios policivos tienen indudablemente, la naturaleza de judiciales. A esto se debe que en el Código Contencioso Administrativo haya previsto que los actos expedidos en los juicios civiles de policía, entre otros, no son objeto de control ante la justicia de lo Contencioso Administrativo. En diversas oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre el carácter judicial de los juicios civiles de policía y especialmente sobre el amparo policivo posesorio; ha diferenciado entre la función propiamente administrativa desarrollada en materia de policía y la función judicial ejercida por tales autoridades (…)”.

Teniendo en cuenta los anteriores apartes jurisprudenciales, puede concluir el Despacho que la Jurisdicción Contencioso Administrativo no está instituida para ejercer control judicial frente a las actuaciones y/o decisiones adelantadas en un juicio policivo, situación que permite según lo dispone el numeral 3° del artículo 169 del C.P.A.C.A., imponer el rechazo de plano de la demanda por falta de jurisdicción.

Finalmente debe advertirse que los actos aquí demandados están dirimiendo un conflicto entre dos particulares, razón también suficiente para rechazar el

¹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 70001-23-33-000-2017-00201-01

presente medio de control, toda vez que no se encuentra probado en este asunto la participación del estado.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la presente demanda interpuesta por la señora **MARÍA DE JESÚS BOLÍVAR BUITRAGO**, dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose y archívense las diligencias, previas las constancias del caso.

TERCERO: Reconózcase personería para actuar como apoderada de la parte actora a la Dra. ALEXANDRA PLATA ARANZAZÚ, identificada con cédula de ciudadanía No. 29.679.890 y portadora de la tarjeta profesional No. 350.014, de conformidad con el poder obrante en el expediente.

CUARTO: Este Juzgado acatando el deber consagrado en el art. 46 de la Ley 2080 de 2021, el cual modificó el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:


- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00025-00
DEMANDANTE:	CARMEN ALICIA PEINADO TAFUR E HIJO
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Auto Interlocutorio No. 078

I. ASUNTO

Procede este Despacho a efectuar el pronunciamiento respectivo frente a la presente demanda que correspondió por reparto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Conforme lo normado en el artículo 162 del CPACA, toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente. El artículo 31 de la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se modifica el artículo 156 del CPACA en cuanto a la determinación de la competencia por razón de territorio para el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral, dispone lo siguiente:

“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(..)

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios. Cuando se trate de derechos pensionales, se determinará por el domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga sede en dicho lugar.(...)”(Negrilla del Despacho)

Revisada la demanda Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral, formulada por la señora Carmen Alicia Peinado Tafur e hijo, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se observa que la misma debe ser remitida a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Popayán – Reparto, con el fin de que avoque su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 2080 de 2021.

Cabe precisar, que la competencia está radicada en cabeza de los Juzgados Administrativos del Circuito de Popayán – Reparto, si se tiene en cuenta que del escrito de demanda se desprende que la demandante tiene su domicilio en el municipio de Miranda, Cauca.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que el **ACUERDO PCSJA20-11653** del 28/10/2020 *“Por el cual se crean unos circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional y se ajusta el mapa judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, en su artículo 2º, numeral 10.1. Expresa:*

“10. DISTRITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA:

10.1. Circuito Judicial Administrativo de Popayán, con cabecera en el municipio de Popayán y con comprensión territorial en todos los municipios del departamento del Cauca”.

De lo anterior se concluye, que este Juzgado carece de competencia para avocar el conocimiento de la presente demanda, por lo que se declarará la falta de competencia y de conformidad con el artículo 168 del CPACA se ordenará remitir el expediente a los Jueces Administrativos del Circuito de Popayán – Reparto, para su conocimiento.

En consecuencia, el **Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la falta de competencia para conocer el proceso en razón del territorio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a los Jueces Administrativos del Circuito de Popayán – Reparto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por secretaría, procédase a efectuar las anotaciones en el sistema de gestión judicial SIGLO XXI a que hubiere lugar.

CUARTO: Este juzgado acatando el deber consagrado en el art. 2º ídem, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

☐ **Radicación memoriales:**

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

☐ **Radicación de procesos ordinarios:**

repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co

☐ **Radicación de tutelas y habeas corpus:**

URL <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

☐ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali**

☐ **Correo electrónico:** adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co **Teléfono:** (2)

8962433

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12


(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

JUEZ

LMS.

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	MADDY LUZ HERNÁNDEZ PATERNINA
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	76001-33-33-001-2022-00028-00

Auto Interlocutorio No. 079

La Maddy Luz Hernández Paternina, identificada con C.C No. 23.172978, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda ordinaria laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, con el fin de obtener el la reliquidación de la pensión de vejez, con el promedio de los últimos diez (10) años.

La demanda en cita le correspondió por reparto al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, quien en audiencia celebrada el día 11 de marzo de 2021, dictó sentencia mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad demandada interpone recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

Posteriormente, el proceso fue remitido al H. Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral, correspondiéndole por reparto a la Magistrada Elsy Alcira Segura Díaz.

En audiencia celebrada el día 06 de diciembre de 2021, los magistrados integrantes de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, doctores JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA, CLARA LETICIA NIÑO MARTINEZ y ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ, declaran la nulidad del proceso desde al auto admisorio de la demanda por carecer de competencia para conocer el asunto, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demandante están orientadas a que le sea reliquidada su mesada pensional de vejez, aplicando para ello el régimen pensional contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,teniendo en cuenta además para la liquidación de su IBL el promedio de los salarios cotizados en toda su vida laboral y en los últimos 10 años, según el que le sea más favorable, con la correspondiente indexación de las diferencias pensionales resultantes.

Así mismo, indican los Honorables Magistrados que el ISS a través de la Resolución número 9713 del 27 de agosto de 2007, le reconoció la pensión de vejez a la aquí demandante, en aplicación del régimen pensional establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y su modificación contenida en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,

al acreditar un total de 7.915 días, equivalentes a 21 años, 11 meses y 25 días de servicios o 1.130 semanas entre el tiempo cotizado a cajas o fondos de previsión y las semanas válidamente cotizadas al ISS.

Con todo lo anterior, se ordenó remitir el presente proceso a los Juzgados Administrativos del Distrito Judicial de Santiago de Cali, correspondiendo por reparto a este Despacho Judicial.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda planteada no cumple con la ritualidad exigida tanto por la Ley 2080 de 2021 como por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tanto deberá la parte actora adecuarla teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 34 y 35 de la Ley 2080 de 2021, mediante los cuales se modificaron los artículo 161 y 162 de la Ley 1437 de 2011 así mismo, los artículos 163 a 167 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, se advierte a la parte demandante que, en el momento de adecuar el escrito de demanda conforme a las reglas establecidas en el CPACA, sea específico al momento de razonar la cuantía. Lo anterior con el fin de determinar la competencia en el presente asunto.

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el término de cinco (5) días a la parte demandante con el fin de que adecue la demanda a las normas establecidas tanto en la Ley 2080 de 2021 como en la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDO: Este juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 186 de la ley 1437 de 2011, comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>


Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12

(2) 896-24-11

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
JUEZ**

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

ACCIÓN	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2022-00033-00
DEMANDANTE:	LAURA VIRGINIA VILLAQUIRAN CASTRO
DEMANDADO:	NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DEAJ

Auto Interlocutorio No. 080

I. ASUNTO

En cumplimiento del numeral 2º del artículo 131 del CPACA, me permito poner en conocimiento al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Valle, el hecho de estimar¹ que como Juez Administrativo me encuentro impedida para conocer del proceso de la referencia, por estar incurso en la causal No. 1 del artículo 141 del Código del Código General del Proceso, el cual consagra:

“Artículo 141. Causales de recusación. *Son causales derecusación las siguientes:*

- 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso...”*

Lo anterior si se tiene en cuenta que la demanda ahora impetrada, solicita que la Bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de 2013 haga parte de la base salarial que se toma en cuenta para liquidar las prestaciones sociales del demandante.

Y dicho tema atañe un interés directo de esta Juzgadora pues ha interpuesto demanda para solicitar igual pretensión.

En virtud de lo anterior, se

DISPONE:

- 1. DECLARAR** el impedimento que me asiste para conocer el presente Medio de Control.

¹ Art. 131. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: (...) 2. **Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima** que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta.” (NFT)

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao

Juez

Juzgado Administrativo

Oral 001

Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **75660126b3490df99fd3f0525b8867f9072101b19de9936d71f34eb0cbdf516a**

Documento generado en 17/02/2022 03:37:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>